



MIRYAM L. OCHOA

Profesora emérita

Universidad Externado de Colombia

Las bondades del nuevo decreto: 1331 de julio de 2019

Han pasado 27 años desde la promulgación de la Ley 30 (1992) que organizó el servicio público de la educación superior y reconoce la autonomía universitaria de conformidad con la Constitución Política de 1991. La norma, además, asigna al Estado la función de inspección y vigilancia para asegurar la calidad del sistema. Este reconocimiento permitió un crecimiento importante en la oferta, a veces calificada como desmedida, porque desde 2000 se pasó de 82 instituciones a 304 en 2019 (SNIES), con una deserción –indicador por excelencia de la calidad– de más del 50 por ciento; es decir que uno de cada dos estudiantes no culmina sus estudios. Ante este preocupante panorama, desde 2002, el Ministerio de Educación Nacional ha promulgado y derogado un sinnúmero de leyes, decretos y resoluciones, que propenden por mejorar la calidad con la restricción de la autonomía en aspectos relacionados con la creación de programas académicos y el otorgamiento del registro calificado, requisito que asimismo ha sido objeto de más de 20 ajustes y actualizaciones.


La Ley 30 también crea el Sistema Nacional de Acreditación como estrategia para promover la calidad, pero hoy solo 43 instituciones (14 por ciento) cuentan con acreditación vigente. No obstante los esfuerzos de estas instituciones por aportar un valor agregado a su oferta de pregrado y posgrado, solo hasta el reciente decreto se reconocen beneficios para el ejercicio de su autonomía.

Ahora, a las IES acreditadas se les otorgan facilidades para la obtención, renovación o modificación del registro calificado, sin tener que someterse a la minuciosa verificación de la calidad de sus recursos humanos y de infraestructura, en armonía con la Ley 30. Destaco de la nueva norma el asumir la educación superior desde una perspectiva dinámica, sin ánimo de homogeneizar, con referentes básicos –no mínimos– de calidad, y en relación con los resultados de los aprendizajes de los estudiantes, los medios y procesos empleados, la infraestructura, las dimensiones no solo

cuantitativas, sino también, y sobre todo, cualitativas y el contexto. En otras palabras, se trasciende la mercantilización de los rankings que se centran en el número de magisteres y doctores, sus proyectos, publicaciones y premios, y múltiples convenios internacionales, sin pertinencia en muchos casos, para valorar la eficiencia, eficacia y calidad a partir de “[...] los avances en las labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión, de tal forma que se evidencie la integralidad, diversidad y compromiso con la calidad [...] bajo principios de equidad, diversidad, inclusión y sostenibilidad” (Decreto 1330/19: hojas 3 y 5). Este reconocimiento de la heterogeneidad de las instituciones centra los requisitos normativos en los resultados de los aprendizajes en relación con el perfil de egreso declarado por la institución y para cada programa, y reduce de manera impor-

tante uno de los problemas fundamentales del proceso de verificación vigente: la subjetividad de los pares académicos y de los consejeros de las salas de Conaces y del CNA. La calidad y pertinencia del perfil del egresado al igual que la identidad y misión de cada institución son los referentes para determinar la calidad de un programa, con lo cual se evitan las comparaciones y sesgos de quienes tienen a su cargo la evaluación

externa de los requisitos y condiciones de calidad, y el otorgamiento del registro calificado.

Finalmente, vale la pena destacar el carácter participativo del proceso que condujo a la formulación de este nuevo decreto, con la realización de más de 30 talleres regionales en los cuales el ministerio creó las condiciones para el reconocimiento de la diversidad de características, naturaleza y prácticas de las instituciones de educación superior del país en concordancia con su contexto local, regional y global. 

La calidad y pertinencia
del perfil del egresado al
igual que la identidad y
misión de cada institución
son los referentes para
determinar la calidad
de un programa.